

Editorial

Una misión para Cristiani

La suerte del conflicto salvadoreño no depende únicamente de las negociaciones entre el Gobierno del presidente Alfredo Cristiani y los guerrilleros marxistas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El enfrentamiento entre el Gobierno y la guerrilla, ciertamente, es uno de los elementos principales de la crisis político-militar que abate a ese país, y su posible solución mediante el diálogo una esperanzadora posibilidad. Hasta ahora, a pesar de las incontables manifestaciones en pro de la paz y la democracia que ha hecho el pueblo salvadoreño, los rebeldes no han cesado en su campaña de guerra.

Pero no basta con que ésta termine. Para que los salvadoreños, tras una década de luchas internas y muchas más de rigidez y polarización social, logren consolidar los avances que han hecho hacia la democracia, es necesario que se devuelva la confianza en las instituciones, que se aplique la justicia con imparcialidad, que se eliminen los fueros especiales de que disfrutaban las fuerzas armadas y, por supuesto, que se encamine la economía por una senda de eficiencia y justicia.

Entre las múltiples situaciones que componen este desafío una tiene, en este momento, particular trascendencia, no sólo por su importancia intrínseca, sino también por el valor de ejemplo, símbolo y enseñanza que encierra. Se trata de la investigación, procesamiento y castigo de todos los responsables por el brutal asesinato de seis sacerdotes jesuitas, ocurrido en noviembre del pasado año, en medio de la ofensiva guerrillera a San Salvador.

Hasta el momento, a pesar de las promesas y buenas intenciones de Cristiani, el proceso ha marchado con extrema lentitud, y existen justificadas sospechas de que no se ha llegado hasta el fondo del asunto porque puede haber implicados militares de muy alto rango. El de mayor gradación apresado hasta ahora como sospechoso de haber dirigido la

matanza es el coronel Guillermo Benavides. Otros ocho, de menor rango, también guardan prisión por el caso. Sin embargo, muchos piensan, y el coronel retirado Sigifrido Ochoa lo ha dicho insistentemente, que hay otros involucrados en el hecho. No importa lo que se crea o deje de creer sobre la veracidad de estos cargos, lo cierto es que sólo puede obtenerse una respuesta adecuada si se desarrolla una investigación realmente exhaustiva y si se realiza un juicio verdaderamente imparcial, con una fiscalía activa. Pero la lentitud que ha envuelto hasta ahora todas las incidencias del proceso hace temer sobre su rectitud.

Las consecuencias de todo esto trascienden lo que luce más evidente por el momento: una posible reducción en la ayuda que proporciona Estados Unidos a El Salvador. Ello, sin duda, sería grave. Sin embargo, más negativo aún es el impacto que una investigación a medias y un juicio dudoso podrían tener sobre la sociedad salvadoreña. Si ello ocurriera, no importa cuál sea la suerte de las negociaciones Gobierno-FMLN, las posibilidades de un mayor avance político en el país y de la consolidación de sus precarias instituciones se verían severamente frenadas; los ciudadanos tendrían todo el derecho a dudar de sus instituciones y, peor aún, del sistema democrático.

Por esto, Cristiani, quien hasta el momento ha dado muestras de gran sensatez y moderación, debería adoptar una actitud más enérgica, y decidirse incluso a arriesgar un enfrentamiento con sectores de las fuerzas armadas que, probablemente, estén intentando entorpecer las investigaciones judiciales. En el seno de la institución militar, por otra parte, es necesario que los oficiales que apoyan el profesionalismo y la subordinación al poder civil se conviertan en promotores de una actitud más enérgica del Presidente.

Es una misión difícil, pero que debe emprenderse por el bien de todos los salvadoreños.